ACERCA DE LA LEY 25.345 ...

“SOI DISSANT” DE LA PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL Y EL DERECHO ADUANERO

por ALVARO IZURIETA Y SEA

“El derecho es el arte de lo bueno y lo justo”

Digesto

*“Ahora, pues, oh reyes comprended;
instruíos, vosotros que gobernáis la tierra”*

Salmo IIº, 10

SUMARIO

- I. Introducción
- II. Observaciones
- III. Análisis del articulado de la Ley
- IV. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN:

Debo confesar que la sanción y promulgación de la ley 25.345, dictada para prevenir la evasión fiscal sólo atrajo mi atención, como al resto del común de las gentes que habitan nuestro bendito país, en lo que hace al “*cheque cancelatorio*” y, embarcado en los meandros del Derecho Civil, la puesta en entredicho el poder cancelatorio del papel moneda y demás demases la fui dejando hasta que (permítame el lector algunas expresiones coloquiales como la que va delante) de “chiripa” caí en la cuenta de las sombrías connotaciones que conlleva el articulado de la ley de marras y, de ese darme cuenta, surge esta nota.

II. OBSERVACIONES:

Esto de las observaciones que el Poder Ejecutivo Nacional hace a las leyes me cae mal y, mal me cae porque se me aparece como un subterfugio “*democrático-lingüístico*” utilizado por el Poder Ejecutivo Nacional cuando ejer-

ce el derecho que tiene a vetar las leyes, atribución que le otorga el artículo 83 de la Constitución Nacional.

Digo que se me representa como un artificio “*semántico-democrático*” porque, debido al signo de los tiempos y, como en esta aldea global la población tiene una veneración totémica hacia una determinada forma de gobierno, la palabra veto suena autoritaria, despótica y propia del “*Ancien Régime*”; esa interpretación errada e ingenua a la vez surge del “*democratismo*” –según denominación gala– en que nos encontramos inmersos.

Estimado lector, cabe acotar aquí que nuestro país adoptó, desde 1853, la forma de gobierno representativa republicana federal y tengo para mí que, en aras del democratismo se perdió de vista la esencia del sistema Republicano de Gobierno que no es otra cosa que la división de las funciones del Estado y la independencia que debe existir entre ellas.

Como en sí misma la independencia de las

funciones es inmaterial, la independencia depende de la honestidad y espíritu republicano que tengan los hombres que ocupan los cargos.

(Si lo apuntado más arriba, o sea la división de poderes, se da hoy en día debe atribuirse a la mera casualidad. Es más, la realidad legislativa de estos "idus" de marzo del 2001 está demostrando cómo uno de los Poderes del Estado hace dejación de sus funciones y avasalla así la base del sistema republicano de gobierno).

Nuestra Constitución establece en el artículo 83, que el Poder Ejecutivo Nacional puede desechar en todo o en parte un proyecto de ley.

No sé a que constitucionalista se le ocurrió que el Poder Ejecutivo "observase" las leyes. Y, aparte de no saber quien es el autor de la ocurrencia no comprendo, ni al autor ni a la ocurrencia, porque según el Diccionario de la Lengua observar es: examinar atentamente, mirar con atención y recato, atisbar.

De la correcta acepción del verbo "observar" se desprende que, en hablando en castellano, el observar una ley no significa que se la deseche o vete.

Esta observación de las leyes genera en mi caletre la imagen, entre jocosa y trágica del Poder Ejecutivo Nacional, reunido en acuerdo General de Ministros, mirando atentamente la ley y, por qué no, preguntándose: "y ahora qué hacemos", ya que la actitud de observar sólo indica eso. Es una posición estática del sujeto que observa al objeto. Vetar es una posición dinámica del sujeto que opera sobre el objeto desechándolo. Además "desechar" es el verbo que aparece en los artículos 80, 81 y 83 de nuestra Constitución.

La redacción de los artículos 80 y 81 pertenecen a la reforma de 1994 (la del núcleo de coincidencias) y estimo que, en aras de una prosa sin repeticiones, aparece en el artículo 80 la palabreja "observadas". Va de suyo que los constituyentes no han leído los "Nocturnos" de José Asunción Silva porque, de haberlos leído, habrían caído en la cuenta que la repetición, cuando es de buena factura, es poética.

Pero el problema no es sólo semántico; tengo para mí que cuando el Poder Ejecutivo vetaba una ley la leía en forma completa, en cambio hoy en día que la observa, sólo mira y ve lo que quiere observar. De este observar, creo yo, surge el aquelarre que más abajo describo.

III. ANALISIS DEL ARTICULADO DE LA LEY

El tema es tan grave que me veo compelido a hacer, desde mis propias limitaciones, el análisis de algunos de los artículos de esta ley ya que en ellos se describe una conducta humana (perdón por el pleonasma)¹ a la que, sin admitir prueba en contrario, se la tiene como tipificando el delito de contrabando.

También se estaría generando, de acuerdo a la fría letra de la ley, y a una interpretación literal de la misma, una sanción adicional para las declaraciones inexactas, tipificadas como infracción en el artículo 954 del Código Aduanero.

Y, como tanto la Dirección General de Aduanas como nuestra Corte Suprema, son proclives a las interpretaciones literales el tema en estudio cobra real magnitud.

Por otra parte las observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo merecen serios reparos que, en principio, las tornarían inválidas.

ARTÍCULO 39

En este artículo se establece, con el propósito de impedir o dificultar que los cigarrillos de origen nacional, que hubiesen sido exportados retornen y sean consumidos en el territorio nacional que: **"en cada paquete deberá consignarse la leyenda impresa SOLO PARA EXPORTACIÓN PROHIBIDA SU VENTA EN EL TERRITORIO ARGENTINO"**.

Esta disposición no merece objeción alguna ya que es del resorte del legislador fijar las condiciones tendientes a impedir que una exención tributaria, concedida en virtud al destino de exportación para consumo de una determinada mercadería, sea burlada mediante la triangulación de la misma, la que saldría, retornaría

1. "Conducta humana" es un pleonasma porque sólo los seres humanos pueden cometer delitos; aunque de acuerdo a esta ley de aquí a poco se juzgará los ratones como en el siglo IX.

al país y, en definitiva, se consumiría en el territorio nacional libre de impuestos que, en virtud de su destinación de exportación para consumo le fueran dispensados, perjudicando de tal guisa al Fisco y a los hoy día tan denostados fumadores, ya que dudo que el precio al menudeo fuese menor que el que se paga en los kioscos. O sea que es una maniobra que beneficia sólo al evasor.

Hay evasiones impositivas que si bien perjudican al Fisco, vaya uno a saber si, por una de esas, no promueven al bienestar general (por favor no se rasguen las vestiduras, es que me traicionan mis ancestros euskeras que trasegaban en los Pirineos).

ARTÍCULO 40

Este artículo sí que se las trae. No lo afirmo en vano y para demostrarlo lo transcribo:

“La mera detección de estos productos (se está refiriendo a los cigarrillos) dentro el territorio nacional en cantidades que establezca la reglamentación hará presumir de pleno derecho que fueron introducidas por cualquier forma de contrabando, determinando esta circunstancia el inicio de las acciones administrativas y penales que correspondieren, respecto del poseedor de los productos en contravención”

Vayamos por partes: el contrabando es un delito tipificado en el artículo 863 del Código Aduanero y dejar en poder de la Administración Central que por vía reglamentaria se determine cuándo se configura el delito, cantidad de cigarrillos para tener por configurado el delito de contrabando, es, por sí sólo, un dislate jurídico.

Legislar en el sentido que una determinada conducta humana configura un delito y ello sin admitir prueba en contrario, es propio del Derecho Penal del Tercer Reich o del Derecho Penal Soviético, ambos caídos en desuso. En realidad no eran Derecho eran apenas leyes penales que tenían vigencia; pero Derecho no. Y no eran Derecho porque a ninguno de sus legisladores se le pasó por la mente que el valor Justicia tenía que estar inmerso en la ley para que ésta alcance el rango de Derecho.

Puede ser, no lo conozco a fondo ni en la

superficie, que el “Derecho Penal” de los Talibanes –de alguna forma hay que llamarlo– tenga alguna norma parecida.

¿En dónde queda la garantía constitucional del debido proceso legal si en la norma que comento ni siquiera hay proceso?.

Porque no puede llamarse proceso a unas actuaciones en las cuales no se admite prueba porque existe una presunción, “jure et de jure”, de que el tenedor de la mercadería es un contrabandista.

¿En que pensaban los legisladores, que tienen título de abogado, cuando levantaron la mano para aprobar este artículo?

(Es imprescindible acotar, aunque sólo sea de paso, que ni en mensaje con el cual el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley al Congreso, ni los Señores Miembros Informantes, tanto en Diputados como en Senadores, no pararon mientes en esta retrógrada innovación la que no mereció discusión alguna).

¿Cómo se le escapó al Poder Ejecutivo Nacional, en acuerdo General de Ministros, donde había varios abogados y, estaba presidido por un reconocido especialista en el Derecho Procesal Penal esta aberración y no la vetó? ¿Será acaso por el tema de las observaciones? ¿O el proyecto de “decreto observatorio” lo redactaron inidóneos amanuenses?

Sea por lo que sea, el olvido del Poder Ejecutivo que permitió que tenga vigencia una norma como la que comento es una real tragedia. Espero que sea un olvido, un *lapsus calami* y no que los miembros del Poder Ejecutivo que suscribieron el decreto 1.058/2000, estén de acuerdo con una disposición legal que va en contra de toda la tradición doctrinaria de nuestro país así como también en contra de nuestro Derecho Penal positivo y vigente, los que han adherido, tanto la doctrina como la ley positiva, al Derecho Penal Liberal.

(Tengo para mí que, con “necesidad y urgencia” el Poder Ejecutivo debería dictar con efecto retroactivo, un decreto observatorio –si así les gusta llamarlo– vetando u observando el mentado artículo 40. No se asuste el lector por lo que propongo porque, cuando estoy redactando estas líneas marzo del 2001, en el Congreso Nacional están pasando cosas más gra-

ves que ésta, mi inocente sugerencia)

Pero más allá de la incongruencia dañosa antes apuntada el artículo tiene otras fallas que son propias de la improvisación legislativa.

En efecto, se presume de pleno derecho que los cigarrillos fueron introducidos al país de contrabando. Ergo también se debe presumir que fueron legítimamente exportados.

Pero ¿qué pasa si en una exportación vía terrestre, documentada FOB Frontera, el camión en su trayecto a la frontera es visitado por los piratas del asfalto y, como los piratas a los que me refiero son una especie de Lindor Covas, (Robin Hood a la criolla) reparten los cigarrillos entre los menesterosos de la zona? (hoy día hay bastantes).

De acuerdo al texto de la ley, que no admite prueba en contrario, los cigarrillos salieron del territorio nacional legalmente exportados, volvieron a entrar de contrabando. Ergo los tenedores son contrabandistas.

De nada valdrán, dado el texto expreso de la ley, la denuncia del robo efectuada por el exportador antes las autoridades policiales, el sumario incoado ante el Poder Judicial, consecuencia de la denuncia del robo, tampoco valdrá el pago del seguro que amparaba la mercadería hasta la frontera, etc..

No, nada vale para la ley, los cigarrillos salieron del país e ingresaron de contrabando.

Si mi ejemplo es absurdo la ley no le va en zaga.

Pero en el ejemplo que he puesto, que no es tan absurdo como parecería a primera vista, falta un elemento constitutivo para que se configure el delito de contrabando. Esto es el haber violado el control que la Dirección General de Aduanas debe ejercer sobre las importaciones y las exportaciones atento lo establecido en el artículo 863 del Código Aduanero² y, como en el ejemplo no hubo ni egreso ni reingreso de los cigarrillos al país, no pudo haberse cometido el

delito contrabando porque la Dirección General de Aduanas no tuvo parte en el entuerto. No obstante ello, o sea la ausencia de intervención aduanera en el cuento de marras, para la ley, los tenedores de los pitillos son contrabandistas.

Pero es que además estaríamos ante un delito de comisión imposible porque de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Código Aduanero³ no hubo ni exportación ni importación, no hubo operación aduanera alguna salvo que se tome como operación aduanera la oficialización de un permiso de embarque no cumplido.

Para mi existió, eso sí, una "tentativa de exportación" y digo tentativa porque la exportación fue frustrada por los cacos.

ARTÍCULO 41

El artículo en cuestión lo analizaré por párrafos, por ello los transcribiré en el momento de analizarlos.

PRIMER PÁRRAFO DEL ART.41:
"Cuando de las exportaciones de cigarrillos y combustibles líquidos se constatare que la declaración efectuada por el exportador difiere de lo que resulta de la comprobación realizada por el servicio aduanero, sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por los ilícitos que se hayan cometido, se impondrá al exportador una multa de cinco veces el importe de los impuestos internos o sobre los combustibles líquidos y el gas natural que se hubiesen eximido y/o reintegrado, en caso de haber pasado inadvertida la maniobra..."

¿Qué quiso hacer el legislador?

Atento al texto de la ley, ésta sería aplicable a todas las declaraciones inexactas descriptas en el artículo 954 del Código Aduanero ya que, el artículo que comento en su parte pertinente reza: "sin perjuicio de las sanciones que corresponda aplicar por lo ilícitos que se hayan cometido".

2. Artículo 863 "Será reprimido con prisión de seis meses a ocho años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio que las leyes acuerdan para el control sobre las importaciones y las exportaciones"

3. Artículo 9 "1°) Importación es la introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero 2°) Exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero"

De la redacción surgiría, sin mayor esfuerzo intelectual, que el legislador quiso agravar la situación del documentante que, en el curso de una exportación, pudiese haber incurrido en alguna de las declaraciones inexactas que describe el artículo 954 del Código Aduanero y, agravaría de tal suerte la situación del presunto infractor, al adicionar a las penas previstas en el Código citado, la que está creando en la norma que comento.

Lo que apunto surge del hecho que la multa creada en el artículo 41 se aplica sin perjuicio de los ilícitos que pudiesen haberse cometido al momento de oficializar la declaración aduanera de exportación para consumo, la redacción implica una remisión tácita a cualquiera de los incisos del artículo 954 del Código Aduanero.

Mas, como en el tercer párrafo de este artículo 41 hay una remisión expresa al articulado del Código Aduanero cuando en éste se legisla sobre el tránsito de exportación, la remisión tácita que he apuntado no parece tan clara y daría pie para un interpretación restrictiva de la norma.

En efecto ¿cuáles serían las razones que tuvo en miras el legislador para hacer en un párrafo una remisión tácita y en otro, del mismo artículo, una remisión expresa? Sábelo Dios.

Yo, en mi fuero íntimo, creo que estamos ante un mero error de redacción que traerá un quebradero de cabeza al llamado a aplicar la ley, ya que éste, el intérprete, no puede darse el lujo de sostener que se encuentra ante un error de redacción y, en consecuencia, resolver como le venga en ganas. Por el contrario deberá esforzarse por hacer justicia pese al texto de la ley y desentrañar, si fue la voluntad del legislador sancionar con una pena adicional a todas la declaraciones inexactas descritas en el artículo 954 del Código Aduanero o, si en realidad, se está creando un tipo infraccional nuevo y distinto,

que no figura en el artículo mencionado.

ARTÍCULO 954 del CÓDIGO ADUANERO⁴

Lógico es que, luego de lo apuntado ut supra analice, a la luz de lo establecido en los distintos incisos del artículo 954, si existe en ésta ley una nueva sanción que se pueda agregar, a las ya establecidas en el artículo 954 del Código Aduanero y, en su caso, cómo y cuándo.

INCISO a) "... un perjuicio fiscal...". La redacción llevaría a pensar que están involucradas en este artículo las declaraciones inexactas que produzcan un perjuicio fiscal.

Debemos recordar aquí que el perjuicio fiscal viene descrito, en lo que aquí interesa, en el inc. b) del artículo 956 del Código Aduanero como: "*... la falta de ingreso al servicio aduanero del importe que correspondiere por tributos cuya percepción le estuviere encomendada, el ingreso de un importe menor al que correspondiere por tal concepto...*"

Pero, si nos fijamos con detenimiento, veremos que la sanción prevista tiene, como base de cálculo, los impuestos que no se hubiesen ingresado porque la mercadería fue documentada para consumo de exportación y, si la ley en comentario tiene por objeto impedir la evasión fiscal, caeremos en la cuenta que la exportación de cigarrillos, gas natural y combustibles no puede producir perjuicio fiscal por cuanto su exportación está exenta del pago de esos tributos. Por lo tanto cuando la mercadería es realmente exportada no existe perjuicio fiscal.

La diferencia, entre lo declarado y lo comprobado por el servicio aduanero, prevista en el artículo 41 de la ley que comento, no puede ser incluida en las prescripciones del inc. a) del artículo 954 ya que la percepción de los Impuestos Internos, al Valor Agregado y a la Transfe-

4. Artículo 954, Párrafo primero que, a los fines de la nota es el que interesa: "*El que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinación de importación o exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resulte de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida, produjere u hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción; c) el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de la diferencia*"

rencia de Combustibles no está encomendada a la Dirección General de Aduanas, por lo tanto la no percepción de los mismos no integra el concepto de perjuicio fiscal que trae el artículo 956 del Código Aduanero, que en su parte pertinente transcribí más arriba.

INCISO b) "... una transgresión a una prohibición ... a la exportación..."

Si estuviese prohibida la exportación de las mercaderías a las que hace referencia la ley, y alguna de ellas fuese documentada a consumo de exportación y la exportación se llevase a cabo, debemos convenir que en esa declaración comprometida existió, ardid, engaño o connivencia aduanera y, por ende, no estamos ante la figura descripta en el inc. b) del artículo 954 sino ante el delito de contrabando, ya que mediante la declaración comprometida se violó la prohibición a la exportación y el control aduanero.

Ello así la sanción creada en la norma que comento, si el legislador hubiese tenido en miras agravar las penas que trae el Código Aduanero para el delito de contrabando, se debería aplicar en aras de la coherencia, luego que el Poder Judicial determine la existencia del delito de contrabando y, además de comprobar que, por la mercadería exportada dolosamente, no se haya cumplido con los tributos que gravan su comercialización. Porque, amable lector, si estuviese prohibida la exportación de cigarrillos y se descubriese un contenedor, listo para exportar, repleto de cigarrillos y cada paquete tuviese adherida la estampilla de Impuestos Internos ¿cuál sería la base para calcular la multa creada en el artículo que comento si los cigarrillos tributaron el impuesto?

No se me escapa que se podrá estar en desacuerdo con mi tesis y, se defenderá la existencia de la infracción de declaración inexacta del inc. b) del artículo 954, en forma conjunta con el delito de contrabando, cuando la mercadería

está sujeta a una prohibición de exportación.

Mas en la realidad concreta de hoy día y, mediando el Sistema Informático María, es imposible oficializar un permiso de embarque con mercadería cuya exportación se encuentre prohibida, si el documentante no actúa dolosamente ante el pedido de aclaraciones que va efectuando el SIM.

Por otra parte atento lo dispuesto en el artículo 913 del Código Aduanero⁵ aunque se sostenga, en el caso, la posibilidad teórica de la existencia autónoma de una infracción aduanera, si el hecho que la constituye al mismo tiempo tipifica un delito se aplicará la pena prevista para éste, con lo cual por la vía del concurso y a los fines prácticos, la posible discusión sobre el tema se vuelve meramente teórica y diría que hasta bizantina.

INCISO c) "...un importe pagado o por pagar distinto al que correspondiere..."

De acuerdo a la jurisprudencia de nuestra Corte, por todos conocida, que surge de los fallos "*Frigorífico Rioplatense S. A.*", "*Subpuga S. A.*", "*Olega S.A.*"⁶ y "*Bunge y Born Comercial S.A.*", si la diferencia existente entre lo declarado y lo verificado por el servicio aduanero es de las descriptas en el inc. c) del artículo 954, no hesito un segundo en afirmar que se aplicará la multa de cinco veces la exención tributaria. Y para nada importará la exención tributaria fue concedida teniendo en miras el destino de exportación de la mercadería, sin correlato alguno con el precio pagado o por pagar por el comprador extranjero. Es que el legislador no estaba pensando en el ingreso o egreso de las divisas al crear la sanción de cinco veces el monto de los tributos que se eximieron en virtud al destino de exportación de la mercadería, sino que tendía a perseguir el reintegro al país de la mercadería que se documentó a consumo de exportación Pero, así están las cosas. ¡¡La veracidad es la veracidad!!!

5. Artículo 913 "Salvo disposición en contrario, cuando el mismo hecho configure simultáneamente una infracción aduanera y un delito, se impondrán las penas previstas para el delito"

6. El poco respeto y la pobre opinión que me merecen los fallos citados la di en esta misma publicación Año IV N°6 y Año VI N°10

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART.41: Del farragoso párrafo segundo queda en claro que no se aplica a la exportación de cigarrillos ya que en la larga enumeración de los hidrocarburos y sus mezclas no aparecen los cigarrillos.

Pero esa primera parte del párrafo que, bien puede comentarla otro si le viene en ganas, no me ocuparé sino de lo que trae, "*in fine*", este párrafo y que reza así:

"... extendiéndose la responsabilidad del exportador hasta la verificación del cumplimiento de la destinación aduanera declarada."

Como primera aproximación al tema estimo que la ley genera la responsabilidad objetiva del exportador si la mercadería no llega al destino declarado en el permiso de embarque.

Para ir desbrozando el tema, ya que la ley no lo hace, quiero imaginar que la variación del destino se refiere a que una mercadería destinada a Estambul termine en Bahía Blanca, porque si en lugar de Bahía Blanca termina en Sierra Leona la variación del destino, que le dio el consignatario que figura en el Conocimiento de Embarque, en nada afecta al Erario Público.

Pero supongamos que, sin saberlo el exportador, el importador de Estambul anda en la "*fulería*" y, comprada la mercadería FOB Buenos Aires, cargada la misma, hecho a la vela el navío, al avistar el capitán el Cabo San Antonio, ordena —en combinación con el comprador consignatario de la mercadería— ¡¡¡"Todo a estribor" proa a Bahía Blanca!!! La mercadería es descargada en ese puerto, en horas inhábiles y por lugares no acostumbrados. (No quiero comprometer a los funcionarios aduaneros de la Aduana de Bahía Blanca).

En este caso, reingreso de la mercadería exportada al país, sí aparecería, para el legislador, la responsabilidad del exportador.

Pero ¿qué clase de derecho represivo estamos creando?

¿No repugna acaso a la forma Republicana de Gobierno, la sanción penal sin la existencia de dolo o culpa en el agente? Y no se pretenda argüir que estamos dentro del derecho represivo infraccional, porque tampoco estoy de acuerdo con la responsabilidad objetiva en esa materia.

Pero por otra parte, a toda acción infraccional o delictiva se contraponen un determinado de-

ber: Ser veraz en las declaraciones aduaneras, no matar etc.. O sea que para que exista un hecho punible y con ello la posibilidad de aplicar una sanción, tiene que haber una conducta que tipifique expresamente lo que la ley prohíbe y, esa acción, tiene que ser imputable al que cometió el hecho.

Pues bien, si la ley que comento, si es que así se la puede llamar, hace responsable al exportador por una acción que no le es imputable, porque no fue por él cometida ya que al embarcar la mercadería, cuando la agencia marítima expide el conocimiento de embarque se desprende del dominio de la misma y, por lo tanto, ya nada puede hacer sobre el destino que el consignatario asigne a la mercadería que le compró FOB puerto de embarque, o mediando cualquiera de las otras reglas INCOTERMS, que se utilizan en la compraventa internacional de mercaderías, cuando en ellas existe la "*traditio*" de la propiedad al momento del embarque. Estamos, amable lector, ante UN SOBERANO DISLATE JURÍDICO que, pese al acendrado "fiscalismo" del que adolece nuestra Corte Suprema, dudo que pueda ser convalidado.

TERCER PÁRRAFO DEL ART. 41:

En este párrafo parecería ser que el legislador quiso crear una sanción para el exportador, cuando éste documenta una destinación suspensiva de tránsito de exportación y la mercadería no llega a la aduana de salida.

Y digo que quiso crear y no creó porque la parte pertinente del párrafo reza así:

"... *destinación suspensiva de exportación contemplada en los artículos 374 al 385 del Código Aduanero, LA SANCIÓN ALLÍ PREVISTA será aplicable al exportador...*"

Estimado lector, me abstengo que transcribir como nota al pie de página, todos los artículos del Código Aduanero a los que remite el párrafo bajo comentario porque, de hacerlo, la nota sería más larga que este artículo, pero tenga usted la seguridad que he leído y releído, con toda atención, medida, detenimiento una y otra vez, el articulado de nuestro Código en el que se legisla sobre el tránsito de exportación y no he encontrado "ALLÍ" sanción alguna.

No puede decirse que el legislador se esté remitiendo a una sanción **allí prevista** porque en el artículo 385 "*in fine*" se diga "... *sin perjuicios de la responsabilidad por lo ilícitos que se hubieren cometido*"

Al remitirse nuestros legisladores, a una presunta sanción existente en los artículos que regulan el tránsito de exportación, demostraron su escaso conocimiento de nuestro plexo jurídico nacional. Y lo que afirmo es cierto porque, les hubiese bastado una ligera lectura del índice del Código Aduanero para caer en la cuenta que, en los Títulos I° y II° de la Sección XII, están tipificados los delitos e infracciones aduaneras con sus respectivas sanciones y por lo tanto la remisión que estaban haciendo carece de todo sentido.

Es que tengo para mí que, al momento de redactar este párrafo los legisladores, pese a remitirse al Código Aduanero, tal vez por un acto fallido, estaban pensando en el artículo 127⁷ de la Ley de Aduanas t.o. 1962 que fuera derogada, en 1981 por el Código que —gracias a Dios— aún nos rige.

IV. CONCLUSIONES:

I^a. Hubiese sido mejor, en aras del bienestar general, que los artículos que comento no se hubiesen escrito.

II^a. De la intrincada redacción de la ley surge, según mi criterio, que el legislador pretendía perseguir el reingreso y consumo en el país de los cigarrillos y los combustibles que se destinan a la exportación ya que en virtud de ese destino la comercialización está exenta del pago de los Impuestos Internos y del Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Por lo tanto debió especificar que, la sanción creada, se aplicaría sólo cuando la diferencia constatada por el servicio aduanero tuviese en miras violar el destino de exportación y no en cualquier diferencia detectada por el servicio aduanero.

Por ello estimo que será labor del llamado a aplicar la ley, el acotarla en sus justos límites, mercadería que se exporte y retorne para ser consumida en el territorio nacional que es, según mi criterio, lo que quiso el legislador pero, debido a una defectuosa redacción, terminó involucrando todas las posibles diferencias existentes en una exportación y con ello fue más allá de lo que tenía en miras.

III^a. Resulta un evidente desafuero, jurídico y filosófico, el pretender sancionar al exportador cuando la mercadería, realmente exportada cambia de destino sin arte ni parte del exportador.

IV^a. No le va en zaga, al desafuero apuntado más arriba, la absurda pretensión de tener por tipificado el delito de contrabando, en el curso de un proceso en el cual no se admite la prueba ni la defensa. En efecto, la sólo existencia de la etiqueta en el "*atado*" de cigarrillos tiene por tipificado el delito de contrabando, sin admitir prueba en contrario.

V^a. Pensaba emprender la tarea de analizar si el veto u "observación" de la ley en cuanto fue parcial, se tramitó de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 de nuestra Constitución Nacional, o sea si el veto parcial tuvo el trámite previsto para los decretos de necesidad y urgencia y si la parte no vetada tenía la autonomía suficiente para ser promulgada. Pero cuando redactaba estas líneas se aprobó la ley llamada de la Competitividad, primera y segunda parte, por lo tanto ahondar en el tema me pareció, arar en el agua.

VI^a. Más que una conclusión es una postrera aclaración. En efecto, si el amable lector llegó hasta aquí le debo explicar que la nota la redacté en marzo del 2001. Sólo cambié el tiempo del verbo, de presente a pasado, cuando hago referencia al Poder Ejecutivo Nacional. Pero a la luz de lo acontecido en nuestra Patria desde diciembre a este momento, marzo del 2002, sin retractarme ni "*un*

7. Artículo 127 L.A. t.o. 1962 "2° Igual presunción a la establecida en el apartado precedente regirá para la mercadería de exportación que se encontrare en tránsito, considerándose que ha sido exportada para consumo, en cuyo caso regirán las obligaciones establecidas precedentemente.." En el párrafo precedente, tránsito de importación, se obligaba al pago de tributos y multas si la mercadería tuviese una restricción directa. En párrafo tercero se hacía solidariamente responsable, por todo lo adeudado, hasta al que vio pasar al camión o buque en el que se efectuaba el tránsito.

tranco e' pollo" de lo escrito, a la ley y el decreto que comento los visualizado como pecados veniales, por parvedad de materia. También han reaparecido las retenciones a

las exportaciones para consumo de gas natural e hidrocarburos pero, sinceramente, por ser tan voluble nuestra legislación, no tengo ánimos para avocarme al tema.